

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, tres (03) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

DEMANDANTE	: HERNÁN DARÍO MENESES RESTREPO
DEMANDADO :	: MARTHA ALICIA MEJÍA DÍAZ
TIPO DE PROCESO	: EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-001-2021-00365-01
RADICADO INTERNO	: 004-23
DECISIÓN	: CONFIRMA AUTO
ACTA NÚMERO	: 034

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte ejecutante presenta escrito mediante el cual solicitó se librara mandamiento de pago en contra de la señora MARTHA ALICIA MEJÍA DÍAZ en los siguientes términos:

“PRIMERA: Que se libre mandamiento de pago en contra de la señora y a mi favor y en contra de la demandada por valor equivalente al 30% de lo percibido como retroactivo pensional conferido por Colpensiones a la señora MARTHA ALICIA MEJÍA DÍAZ.

SEGUNDA: Que igualmente se libre mandamiento de pago por los intereses de mora sobre el valor del capital en contra de la demandada y a mi favor a partir de la presentación de la demanda y hasta el pago total de la obligación.

TERCERA: Que se indexen las sumas adeudadas por la demandada, debido a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada”.

La anterior petición se fundamentó en los siguientes hechos:

Que ante el Juzgado Décimo Laboral de Medellín en representación de la señora MARTHA ALICIA MEJÍA DÍAZ radicó demanda ordinaria laboral en procura de obtener LA PENSIÓN DE VEJEZ por haber reunido los requisitos legales.

Que la demandada ocultando toda información al apoderado tramitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, **evadiendo desde luego el pago de los honorarios pactados.**

Por lo anterior solicita oficiar a COLPENSIONES para que remita con destino al despacho copia de la Resolución que reconoce y paga LA PENSIÓN DE VEJEZ a la señora MARTHA ALICIA MEJÍA DIAZ.

Que mediante derecho de petición del 21 de mayo de 2021 solicitó a COLPENSIONES le expidiera copia del acto administrativo que le confiere la pensión a la señora MARTHA ALICIA MEJÍA DÍAZ.

Que el 24 de mayo de 2021 COLPENSIONES da respuesta a lo solicitado, indicando que dicha información de conformidad con el artículo 24 de la ley 1755 de 2015 tiene el carácter de reservado, pero que no se le dio una respuesta concreta por cuanto como lo indicó en la solicitud la señora MEJÍA DÍAZ le confirió poder para tramitar por la vía administrativa el trámite del reconocimiento de la pensión de vejez.

Que según se desprende del contrato de prestación de servicios signado entre la demandada y el suscrito, la segunda cláusula del mismo indica que la demandante pagará al abogado por concepto de honorarios profesionales el equivalente al 30% de la suma que llegará a recibir la demandada por parte de Colpensiones.

En virtud de lo solicitado el Juzgado mediante auto del 30 de noviembre de 2021 dispuso negar el mandamiento de pago pretendido.

### **RECURSO DE APELACION.**

La parte ejecutante interpone recurso de apelación manifestando que el contrato de prestación de servicios profesionales firmado con la ejecutada reúne los requisitos de un título ejecutivo de conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, y luego de hacer referencia a que es una obligación clara, expresa y exigible indica que como pretende el despacho

que adquiriera una prueba que es de carácter reservado, pues así lo dispuso Colpensiones frente a la petición escrita del 21 de mayo de 2021 y que obra en el expediente.

Que por lo anterior el juez debió oficiar a Colpensiones para que remitiera al despacho la Resolución que confiere la pensión a la ejecutada, en virtud de lo consagrado en el artículo 169 del Código General el Proceso que habla de las pruebas de oficio.

Por lo anterior solicita se REVOQUE el auto recurrido en el sentido de ordenar al despacho oficiar a Colpensiones para que remita la Resolución que le confiere la pensión de vejez a la señora MARTHA ALICIA MEJÍA DÍAZ; y una vez allegado dicho documento libre mandamiento ejecutivo de pago en contra de la misma.

### **ALEGATOS DE CONCLUSION**

Las partes no presentan alegatos de conclusión.

### **CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiéndose que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

Se centra el problema jurídico en esta instancia en determinar si hay lugar a librar mandamiento de pago a favor del ejecutante y en contra de la señora MARTHA ALICIA MEJÍA DÍAZ, por el valor equivalente al 30% de lo percibido como retroactivo pensional conferido por Colpensiones a esta, más los intereses moratorios, la indexación y las costas del ejecutivo.

Por lo anterior se resolverá el problema jurídico en el siguiente orden:

**De los requisitos del título ejecutivo, y la indexación de las mesadas pensionales.**

Al respecto establece el artículo 100 del C.S.T con relación a la procedencia de la ejecución lo siguiente:

**“ARTICULO 100. PROCEDENCIA DE LA EJECUCION. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación** originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o **que emane de una decisión judicial o arbitral firme.**

*Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”. (subraya de la Sala).*

En el mismo sentido el artículo 422 del C.G.P establece con respecto al título ejecutivo lo siguiente:

*“Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones **expresas, claras y exigibles** que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (...)”. (subraya de la Sala)*

Ahora, con respecto a los requisitos del título ejecutivo, se hará un breve apunte respecto del contenido semántico que le es propio a cada uno de estos términos:

**a. Que la obligación sea clara:** consiste en que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (obligación real o personal), como sus sujetos (acreedor y deudor), además de la descripción de la manera como se ha de llevar a cabo la prestación (plazo o condición), presupuesto sin el cual no sería posible determinar con la certeza requerida el momento de su exigibilidad y la verificación de un eventual incumplimiento.

**b. Que la obligación sea expresa:** quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patentada en el documento ejecutivo. Esta determinación, por tanto, solamente es posible hacerse por escrito. En otras palabras, este requisito se cumple cuando los elementos constitutivos de una obligación que se pueda llamar clara se hacen constar por escrito en un instrumento que servirá de prueba inequívoca de la existencia de una obligación.

**c. Que la obligación sea exigible:** Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o, que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido ésta, sea por mandato legal o por acuerdo entre las partes contractuales. (Juan Guillermo Velásquez “De los procesos ejecutivos”).

Partiendo de todo lo descrito y para el caso bajo estudio se tiene que lo pretendido por la parte ejecutante gira en torno a que se libre mandamiento de pago en contra de la señora MARTHA ALICIA MEJÍA DÍAZ, por el valor equivalente al 30% de lo percibido como retroactivo pensional conferido por Colpensiones a esta, según lo pactado por las partes en contrato de prestación de servicios profesionales.

Pues bien, en sentencia del 31 de enero de 2008 del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativa Sección Tercera, Consejera ponente: Myriam Guerrero de Escobar. Radicación número: 44401-23-31-000-2007-00067-01(34201), se indicó:

*“El título ejecutivo bien puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, como por ejemplo un título valor (v.gr. letra de cambio, cheque, pagaré, etc.); ó bien puede ser complejo, cuando quiera que esté integrado por un conjunto de documentos, como por ejemplo - entre otros - **por un contrato, más las constancias de cumplimiento o recibo de las obras**, servicios o bienes contratados, el reconocimiento del co-contratante del precio pendiente de pago, el acta de liquidación, etc.*

**Los documentos allegados con la demanda deben valorarse en su conjunto, con miras a establecer si constituyen una prueba idónea de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 488 del C.P.C.**

*El título ejecutivo debe demostrar la existencia de una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que el obligado debe observar, en favor de su acreedor, una conducta de hacer, de dar o de no hacer y esa obligación debe ser expresa, clara y exigible, requisitos estos que ha de reunir cualquier título ejecutivo, no importa su origen.<sup>1</sup>*

*Reiteradamente, la jurisprudencia<sup>2</sup> ha señalado que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Las formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de otra providencia judicial que tuviere fuerza ejecutiva conforme a la ley.*

*Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles.*

*Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a lucubraciones o suposiciones. “Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta”.<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, *Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano*, Dupré Editores, Tomo II, 7ª ed., Bogotá, 1999, pags. 388.

<sup>2</sup> Entre otros puede consultarse el auto proferido el 4 de mayo de 2000, expediente N° 15679, ejecutante: Terminal de Transporte de Medellín S. A.

<sup>3</sup> MORALES MOLINA, Hernando, *Compendio de Derecho Procesal, El Proceso Civil*, Tomo II.

*La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.*

*La obligación es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo requerimiento.*

(...)

*De igual manera es menester señalar que, en los casos en los cuales se pretende el pago de una suma de dinero, **por concepto de honorarios profesionales cuya fuente es un contrato de prestación de servicios, se requiere acreditar cuáles fueron las obligaciones que asumieron las partes contratantes y si las mismas fueron o no satisfechas** conforme lo pactado en la relación negocial, para lo cual resulta ineludible acudir al contrato. Pero, además, en los casos en los cuales dicho pago quedó condicionado al resultado favorable o exitoso de la gestión encomendada, resulta menester acreditar que ésta se satisfizo tal como lo acordaron las partes, de manera que no exista duda alguna de que los honorarios devengados corresponden a la gestión realizada satisfactoriamente por el mandatario, según lo acordado”.*

Así mismo, cabe resaltar que ha sido reiterativa la jurisprudencia en señalar que Las obligaciones ejecutables según lo establecido en el artículo 422 del C.G.P, requieren de demostración documental en la cual se advierta la satisfacción de las condiciones tanto formales, como de fondo. Las primeras miran, a que se trate de documento o documentos que conformen unidad jurídica; que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez, o Tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. Las segundas condiciones, de fondo, atañen a que de ese o esos documentos, con alguno de los orígenes indicados, aparezca a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una “obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”.

Ahora bien, en el caso bajo estudio la parte ejecutante allegó como título ejecutivo base de ejecución contrato de prestación de servicios suscrito con la señora MARTHA ALICIA MEJIA DIAZ, en el que se consignó entre otras cosas las siguientes clausulas:

“PRIMERA: La señora Marta Alicia Mejía Díaz contrata los servicios profesionales de abogado para gestionar ante Colpensiones todo lo relacionado con el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.  
SEGUNDA: Como honorarios profesionales se pacta el equivalente al 30% del valor que la contratante llegare a recibir de Colpensiones. En

el evento de que Colpensiones sea condenada al pago de agencias en derecho, es decir, se deba acudir ante los Jueces Laborales de Medellín, estas serán para el abogado”

Aunado a lo anterior la parte ejecutante manifiesta haber iniciado en el juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, proceso ordinario laboral en procura de la pensión de vejez para la señora MARTHA ALICIA MEJIA DIAZ, y acto seguido indica que la misma afiliada, ocultando información, solicitó la pensión ante Colpensiones y que la misma le fue reconocida.

Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que la obligación pretendida por el ejecutante está contenida en un título ejecutivo complejo, el cual está conformado por el contrato de prestación de servicios y por la actuación desplegada por el profesional del derecho ante sea ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín o ante Colpensiones.

A pesar de lo anterior no existe en el proceso ejecutivo interpuesto en esta oportunidad prueba alguna de que el apoderado ejecutante haya sido quien representó a la señora MARTHA ALICIA MEJIA DIAZ en el procedimiento administrativo en el que según este le fue reconocido el derecho pensional por parte de Colpensiones, además de que tampoco existe certeza del supuesto reconocimiento pensional, sin que sea posible oficiar a Colpensiones como lo pretende la parte ejecutante pues no existe ni siquiera un indicio de que efectivamente se haya reconocido la pensión de vejez a la señora MEJIA DIAZ, y sería ilógico ordenar que se oficie a Colpensiones para constituir en esta oportunidad el título ejecutivo que debería haber sido presentado de forma completa en caso tal por la parte ejecutante.

Así mismo debe precisarse que no existe prueba en el proceso acerca de las gestiones que el apoderado ejecutante adelantó dentro del trámite del proceso ordinario y mucho menos dentro de la gestión administrativa ante Colpensiones para el reconocimiento pensional deprecado, por lo que ante la ausencia probatoria en este sentido, es imposible determinar si el referido apoderado cumplió a cabalidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios, por lo que se indica que dicho asunto debe debatirse es en un proceso declarativo de regulación de horarios, y no en un ejecutivo como el pretendido en esta oportunidad.

Además de lo anterior precisa la Sala que no es el proceso ejecutivo la vía adecuada para constituir el título ejecutivo como lo pretende la parte actora, pues en caso tal este podría haber acudido a otras vías como la acción de

tutela si era que Colpensiones no le estaba dando una respuesta de fondo y completa a la petición donde solicita los documentos necesarios para completar el título ejecutivo de forma íntegra que pretende ahora ejecutar.

Con base en lo anterior considera la Sala que en los casos en los cuales se pretende el pago de una suma de dinero, por concepto de honorarios profesionales cuya fuente es un contrato de prestación de servicios, se requiere acreditar cuáles fueron las obligaciones que asumieron las partes contratantes, resultando ineludible acudir al contrato, y sí las mismas fueron o no satisfechas conforme lo pactado en la relación negocial, asuntos que en el presente conforme a la prueba allegada no se encuentran acreditados ni demostrados debiendo avocarse a la CONFIRMACION de la providencia de primera instancia.

Sin costas en esta instancia por la forma en que se resuelve el recurso de apelación.

### **EL FALLO DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto emitido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el 30 de noviembre de 2021 mediante el cual se resolvió negar la solicitud de mandamiento de pago, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

**TERCERO:** Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo.

**CUARTO:** Lo resuelto se notifica en ESTADOS.

Los Magistrados,

  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**





**GUILLERMO CARDONA MARTINEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 038 del 06 de marzo  
de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>